

EL MILITAR, EL SOCIÓLOGO, LOS BULOS Y EL PACTO

Abril 2020

Es lógico que la frase pronunciada por el **jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil** durante su intervención del domingo en la habitual rueda de prensa sobre la crisis del coronavirus haya generado un revuelo, y no solo entre los políticos, sino también en la ciudadanía. Que un mando de un cuerpo militarizado afirme que las actuaciones de ese cuerpo en las redes sociales tengan como objetivo “**minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno**” ni puede ser de recibo ni debe pasar desapercibido por todos los que creemos que la democracia y el estado de derecho no pueden perder ni el más mínimo espacio en aras del combate contra la pandemia.

Aunque en España las decisiones no siempre han sido suficientemente explicadas e incluso **puede defenderse que hay defectos de origen** (como hace el constitucionalista Manuel Aragón) en la promulgación del estado de alarma, me parece que en la sociedad española se ha interiorizado que en la dicotomía entre la libertad personal más amplia y el bien general, en este momento y de manera parcial y temporal, se aceptan las restricciones actuales a nuestras libertades para **dar prioridad al derecho a la vida y a la salud de toda la ciudadanía**.

Claro que ese buen espíritu ciudadano se ha visto sometido hace solo unos días a otra prueba cuando en la encuesta de un organismo de la administración del Estado, el **Centro de Investigaciones Sociológicas** (CIS), se ha preguntado por si “**habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas** y poco fundamentadas..., remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones”. A lo farragoso de esa redacción, se unía que la primera respuesta ofrecida no se correspondía exactamente con lo dicho en la pregunta ya que se decía “**restringir y controlar**”, no “**prohibir**”.

Tal vez la respuesta de dos tercios de los encuestados favorables a las restricciones por solo un tercio a la libertad total, en aparente contradicción con la libertad de expresión que consagra la Constitución, ha hecho mella en la ciudadanía más sensible a esta cuestión, pero asimismo en el subconsciente del militar a la hora de organizar mentalmente la respuesta improvisada a una pregunta en la rueda de prensa. Téngase en cuenta que desde hace años las redes sociales son seguidas por varios organismos de las fuerzas de seguridad del Estado para controlar la expansión de bulos y de campañas de desinformación sobre los más diversos asuntos y, últimamente, temas que pueden crear situaciones de tensión social o ansiedad en relación con la pandemia.

Sea como fuere, la Guardia Civil aclaró en un comunicado cual es la función del cuerpo en la tarea de combatir los bulos “**respetando la libertad de expresión y de crítica**”, como no podía ser de otra manera en el estado de derecho en el que seguimos viviendo en este país, afortunadamente. Personalmente, me pareció aceptable la explicación porque, si damos importancia al “factor humano”, muchas cosas tienen interpretaciones mucho más veraces que las teorías conspiranoicas que tanto nos asaltan en estos tiempos desde casi todos lados, especialmente, desde los más extremos.

Entraba en ese ámbito de las teorías conspiranoicas el video con el que me enteré de la desafortunada frase, un montaje en el que sobre las imágenes con la frase completa del militar, repetida dos veces, podía leerse “**Marlaska ordena buscar a quien critique al gobierno**”, para cerrar su medio minuto de duración con un contundente “**No nos callarán**”. No creo que merezca la pena comentar ni la frase ni el lema ni la elaboración del video: **se descalifican por ellos mismos**. Ni tampoco creo que carezca de sentido buscar una respuesta oficial al entuerto, por lo que si la reacción es de pedir explicaciones (como hicieron formalmente el PP y Ciudadanos) me parece de lo más natural, pero empezar una campaña calificando la metedura de pata como “**el inicio de un golpe de estado**” (que fue la respuesta de Vox) es lo más próximo a la locura que se me ocurre.

Una locura que, permítanme un paréntesis, deja al partido que protagoniza esa reacción como un aliado perfecto del gobierno actual de España, buena parte de cuya estrategia (demagógica) es centrarse en las deformaciones y barbaridades que surgen de Vox y su entorno (y también en ocasiones del PP) para descalificar al conjunto de la oposición y para justificar su cierre de filas interno, pese a que tal vez esto último no sea lo más adecuado si se quiere llevar adelante un acuerdo con el conjunto de la sociedad y con el mayor apoyo de los partidos representativos de la misma para limitar lo más posible los efectos sobre la economía española de la pandemia.

Como decía anteriormente, las actuaciones contra bulos, *fake news* y campañas de desinformación no son nuevas, como no lo son las amenazas que se perpetran para difundir alarma social y tensión bajo las más diversas excusas. Sí parece más nuevo el que para coordinar esas actuaciones se haya organizado una estructura que dirige el todopoderoso **jefe del gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo**. Esto se ha traducido en el incremento de la preocupación gubernamental y de sus medios de comunicación próximos, así como ha puesto al servicio de la misma a los medios públicos en una decisión que, lejos de serenar el ambiente de estos tiempos revueltos, me parece que está contribuyendo a su alteración en mayor medida.

Creo que esto es así, en primer lugar, porque, en línea con el pensamiento dominante, y pesimista, en la sociedad y en los propios expertos en comunicación, las posibilidades de que una actuación en contra de esas prácticas tan fáciles de llevar a cabo en unas redes abiertas y a disposición de los más gritones sin que ello tenga impacto sobre

la libertad de expresión son bastante limitadas; no ahora, sino desde siempre. Sin extenderme mucho en este aspecto, creo que cualquier actuación en ese campo debe estar en todo momento cubierta no por el poder ejecutivo sino bajo el amparo y control del judicial. Además, no debe olvidarse que **si hoy, en España, son los sectores populistas reaccionarios** los que más activos se muestran en esas prácticas, no hace mucho eran **los elementos antisistema, los herederos del 15-M, los independentistas catalanes** y otros sectores vinculados a ellos los que se enseñoreaban de esas mismas redes con objetivos que, opuestos a los de ahora, no creo que puedan calificarse de más o menos contrarios que los de los otros a la racionalidad del debate democrático y fructífero. Y esto sin encontrar una respuesta tan clara como la que se pretende dar hoy por parte de los poderes públicos y los partidos que sostienen al gobierno, sino, por el contrario, con el beneplácito y el apoyo de quiénes ahora se sienten perjudicados por los bulos de los *trolls* de la extrema derecha.

Pero es que también debe incluirse en este ámbito la encuesta del CIS que comentaba al inicio de este texto y que, en mi opinión, merece un análisis más amplio del que ha tenido en los medios de comunicación. No ha sido poco el eco que ha tenido esa encuesta, pero sí me parece que no ha sido el suficiente y que el haberse centrado éste en el punto concreto de los bulos y las falsas informaciones ha ocultado algunas otras cuestiones que, a mi parecer al menos, sugieren un uso nada legítimo de una institución no del gobierno sino de la administración pública española. Uso que no sería la primera vez que se denuncia en la época de su actual responsable, el hasta hace poco miembro de la ejecutiva del PSOE, **José Félix Tezanos**.

La comparación de esa encuesta con la de EL PAÍS del domingo 19 nos permite ver dos ausencias significativas en la primera: en cerca de veinte preguntas no hubo lugar para inquirir por dos cuestiones que se debaten profusamente en la ciudadanía al hablar de la pandemia: la mayor o menor **celeridad del gobierno en la adopción de decisiones importantes** y la valoración de las mismas en relación con las de otros países. Ambas cuestiones son las que ofrecen resultados, en la encuesta del periódico, más desfavorables al gobierno: el 85% de los encuestados responden que esas actuaciones llegaron tarde y son el doble los que se inclinan por valorar peor la respuesta española que los que la valoran mejor. Por mi parte, creo que también hay un sesgo favorable al gobierno en otro momento de la encuesta, cuando se pregunta por si los partidos de la oposición tienen que apoyar o colaborar con el gobierno o seguir criticándole (a lo que abrumadoramente la respuesta es apoyar y colaborar, lo que personalmente comparto), pero no se inquiere si el gobierno debe buscar el acuerdo de la oposición o debe tomar las decisiones que mejor le parezca, cuestión ésta que se oculta mediante la despersonalización de los responsables (“intentar llegar a grandes acuerdos...”).

Tales ausencias, viniendo de un sociólogo con la trayectoria de **Tezanos**, no me parecen baladíes. Siempre adscrito a la línea izquierdista del socialismo, la polémica le está

acompañando desde su toma de posesión en el CIS, con cambios y estimaciones que siempre parecían llegar en el momento más adecuado para justificar la línea del gobierno, y era continuidad de su protagonismo en los tiempos en que promovía, con **Alfonso Guerra**, la “Estrategia 2000” frente a la línea política que seguían los últimos gobiernos de **Felipe González**, en la primera mitad de los años noventa del siglo pasado. La verdad es que no parece la mejor credencial para dirigir una institución que debería estar al servicio del conjunto de la sociedad española y no en exclusiva del gobierno, tal y como esas y otras manipulaciones vienen poniendo de manifiesto.

Son éstos tiempos en los que deberían desterrarse este tipo de actuaciones, si se quiere de verdad encontrar **la colaboración de la sociedad** y de la mayor parte posible de **los partidos y organizaciones económicas y sociales** que la representan. Porque, además, pueden sumarse a decisiones tan poco explicadas como que en medio de la crisis de sanidad de estas semanas el gobierno haya dado entrada en el Centro Nacional de Inteligencia (que también despliega acciones en la lucha contra los bulos y las *fake news*) a un vicepresidente que entretiene el tiempo que le deja libre el cargo en **someter al Estado y a su máximo representante** a su arbitrario escrutinio contrario a la letra y al espíritu de la Constitución que prometió cumplir.

Que además esta última actuación no haya encontrado **ni siquiera una mínima crítica del presidente del gobierno** ni de ningún portavoz del ejecutivo, me parece un mal mensaje a una ciudadanía atribulada por la pandemia y la crisis económica que nos va dejar mucho más pobres a todos y, posiblemente, va a generar unas disfunciones sociales que veremos a ver si se afrontan con espíritu de concordia o de revancha. La continuidad en esa senda me parece que no va a permitir mucho recorrido al acuerdo alcanzado entre el gobierno y el principal partido de la oposición para que una comisión parlamentaria consensue medidas que den respuesta a la crisis económica y social que se nos echa encima con la de la pandemia, cuyos efectos de gran calado parece se van a prolongar todavía por bastante tiempo.

MARTÍN RÍSQUEZ